

Urabá Antioqueño¹

Informe preliminar sobre el estado
de la implementación del Acuerdo de Paz
SEPTIEMBRE DE 2020

Resumen

Luego de la firma del Acuerdo de Paz, los líderes y organizaciones sociales del Urabá antioqueño participaron en la elaboración de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, que tuvo como resultado la firma del Plan de Acción para la Transformación Regional - PATR, que establece las iniciativas que es necesario ejecutar para la transformación del territorio. Adicionalmente, la subregión se ha convertido en receptora de excombatientes de otros lugares del país, que han tenido que trasladarse por diferentes motivos. Los principales obstáculos para la construcción de paz en la región son el control territorial de grupos armados como el Clan del Golfo, que dominan las rutas de salida de drogas ilícitas, y ejercen presión sobre la población rural. Frente a la situación de las víctimas, se resaltan algunos avances en términos de reparación colectiva y las acciones de las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición – SIVJRNR en la región; sin embargo, existen dificultades frente al proceso de restitución de derechos territoriales. Frente a la emergencia por COVID – 19, cabe resaltar que la alianza entre actores del sector público y privado han mejorado las condiciones hospitalarias para la atención de la pandemia; sin embargo, esta emergencia ha provocado un aumento en la vulneración de los Derechos Humanos del campesinado que habita en la ruralidad lejana, particularmente afectaciones a mujeres, por violencia de género e intrafamiliar.

Estado de la implementación

a) La renovación territorial (PDET)

El 14 de septiembre de 2018, se suscribió el Plan de Acción para la Transformación Regional – PATR de la subregión del Urabá antioqueño. Dicho plan recoge las conclusiones que surgieron del proceso participativo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, en el cual se involucraron 10.470 actores del territorio, de los 8 municipios que integran la región.

¹ Esta revisión se centra en los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro de Urabá y Turbo.



Contenido

Estado de la
implementación de los
Acuerdos.

La situación de las
víctimas.

Principales dinámicas y
trayectorias de la
confrontación armada

Capacidades territoriales
para afrontar el COVID-
19.

Durante la elaboración del PATR, se identificaron un total de 56 iniciativas para la transformación territorial. Frente a los proyectos que desarrollan dichas iniciativas, de acuerdo con la Agencia de Renovación del Territorio - ART, en la subregión del Urabá antioqueño, se han aprobado, están en ejecución, o se han ejecutado 124 proyectos, por un valor de \$92.475 millones, a través de estrategias como Obras PDET, proyectos productivos, Obras por Impuestos, OCAD Paz y Yo me subo a mi PDET.

Por un lado, frente al mecanismo de OCAD Paz, a corte de julio de 2020, en la subregión se habían aprobado 9 proyectos (con recursos aprobados equivalentes a \$37.772 millones)² y se tiene prevista una inversión de aproximadamente \$10.000 millones más, para el mejoramiento de vías terciarias en los municipios de San Pedro de Urabá³ (2.9 kilómetros) y Apartadó⁴ (2.2 kilómetros); además, existen compromisos por parte de la ART para gestionar el resto de recursos que son necesarios para la mejora de la infraestructura vial.

Por su parte, frente a las Obras PDET, a corte de junio de 2020, en la subregión de Urabá, se habían terminado 11 obras de pequeña infraestructura comunitaria, por una inversión total de \$3.543 millones⁵. Al respecto, la participación de la comunidad en dichos proyectos generó altas expectativas entre los pobladores rurales de la subregión, pues se ejecutaron obras como la mejora de hogares infantiles, la construcción de acueductos veredales y la generación de alianzas comerciales para la venta de productos a precios justos, entre otras. También, hay confianza en las comunidades de la región frente a la ejecución de los proyectos PDET, debido a que –desde varios sectores– se han promovido iniciativas, como el Comité Universidad Empresa Estado Sociedad – CUEES Urabá, que han aportado a la implementación.

Por otro lado, se han generado en la subregión otros espacios de participación diferentes a la elaboración de los PDET; por ejemplo, se instalaron los Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia. No obstante, integrantes de la sociedad civil hacen un llamado enfático sobre la importancia de tener un diálogo efectivo con las administraciones municipales, con el fin de que ejerzan de manera efectiva el rol de la secretaría técnica de dichos consejos, y realicen procesos de pedagogía frente el papel que estos cumplen y su funcionamiento.

b) La reincorporación

² Gobierno Nacional. Página de seguimiento de regalías. Julio 2020.

³ Información obtenida del sitio web de la ART.

https://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/a_travs_de_ocad_paz_se_invertirn_ms_de_5_mil_millones_para_mejoramiento_de_vas_terciarias_en_san_pedro_de_urab

⁴ Información obtenida del sitio web de la ART.

https://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/inversin_de_ms_de_5_mil_millones_mediante_ocad_paz_para_mejoramiento_de_vas_terciarias_en_municipio_pdet_apartado

⁵ ART. Derecho de petición radicado 20206300042842. Junio 2020.

De acuerdo con las cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN, en total hay 1.347 personas en proceso de reincorporación en Antioquia⁶, de los cuales 485 se encuentran en la subregión de Urabá. De este número, el 100% está inscrito en el Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS y 106 están vinculados a programas de formación académica. En la subregión, los excombatientes se distribuyen, sobre todo, en 2 Espacios Territoriales para la Capacitación y Reincorporación –El ETCR de Llano Grande, en Dabeiba, y el ETCR Mutatá–, y en 3 Nuevas Áreas de Reincorporación - NAR.

La subregión del Urabá antioqueño ha sido destino de excombatientes que se han desplazado desde otras zonas del país. Por ejemplo, a partir de la supresión del ETCR El Gallo, en el Sur de Córdoba, la mayoría de los excombatientes de ese Espacio Territorial se instalaron en los municipios de San José de Apartadó y Mutatá; también, personas en proceso de reincorporación del ETCR Santa Lucía, ubicado en Ituango, debieron ser trasladados a Mutatá, debido a la falta de garantías de seguridad para los reincorporados en el Bajo Cauca.

En relación con los proyectos productivos, en la subregión del Urabá se presentan 48 proyectos de carácter individual, que benefician un total de 52 personas, y 2 colectivos, en los municipios de Mutatá y Dabeiba, que benefician a 132 excombatientes⁷.

El principal reto para la reincorporación en el territorio es el estigma social sobre los espacios en donde se asientan los reincorporados. Con el propósito de atender esta problemática, la ARN lidera la implementación del Modelo de Fortalecimiento Comunitario⁸, en el corregimiento de San José de Apartadó, con familias rurales y reincorporados, provenientes –en su mayoría– del extinto ETCR El Gallo, que estaba ubicado en el municipio de Tierralta, Córdoba.

c) El problema de las drogas ilícitas

Por su ubicación geográfica, sus conexiones por ríos, laderas, la cercanía con el nudo del Paramillo y la salida que tiene el Golfo hacia aguas internacionales, Urabá es una zona de alto valor estratégico para actores armados al margen de la ley interesados en la producción, transformación y transporte de sustancias psicoactivas, así como para el desarrollo de otras economías ilícitas.

Las rutas de salida de drogas ilícitas son controladas principalmente por el llamado Clan del Golfo, por lo que, actualmente, diferentes estructuras armadas del interior del país han hecho acuerdos con el Clan, para coordinar la salida de

⁶ Información obtenida del sitio web de la ARN

<http://www.reincorporacion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20ARN%20en%20Cifras/ARN%20en%20cifras%20corte%20Junio%202020.pdf>

⁷ ARN. Respuesta a derecho de petición con radicado OFI20-016353.

⁸ Información obtenida del sitio web de la ARN <http://www.reincorporacion.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/Paginas/2019/En-Uraba-y-Choco-se-implementan-iniciativas-para-fortalecer-la-convivencia-con-excombatientes-de-Farc-Ep.aspx>

estupefacientes a través del Golfo, y la entrada de dinero, armamento e insumos para el procesamiento de coca.

La Fiscalía General de la Nación informó que, en los meses de julio y agosto de 2020, en el marco de la Operación Agamenón II, se incautaron más de 4 toneladas de cocaína, en los municipios de Turbo y Necoclí, todas pertenecientes al Clan del Golfo⁹, a los que se suman más de 500 kg que fueron incautados el pasado 14 de septiembre¹⁰.

De acuerdo con líderes locales, esta situación ha causado disputas al interior de las estructuras del Clan, que se expresan en el relevo de los liderazgos, muertes aleatorias sin explicación, traslados repentinos y más restricción para ingresar a zonas rurales dispersas, donde hay cultivos de uso ilícito. Sin embargo, respecto a la presencia de cultivos, a 2018, el Observatorio de Drogas de Colombia reportaba solo 70 hectáreas, por lo cual no hay familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS, en la subregión.

Según dichos líderes, la situación de la región frente al problema de las drogas ilícitas ha causado afectaciones en los modos de vida del campesinado y mayor percepción de inseguridad.

d) Garantías de Seguridad

De acuerdo con la Policía Nacional, la tasa de homicidios en la subregión, entre julio de 2019 y julio de 2020, es de 38.92 personas por cada 100.000 habitantes. Al respecto, la base de datos de homicidio de la Fundación Ideas para la Paz - FIP muestra una tendencia a la baja en el número de eventos desde 2018, reportando 277 homicidios en ese año; 202, en 2019, y 115, en lo que va de 2020¹¹.

Adicionalmente, a abril de 2020, la Defensoría del Pueblo reporta 6 homicidios a líderes sociales en la subregión, entre los cuales se encuentra el asesinato de Luis Amado Torres¹², líder de vereda la Miranda de San José Apartadó, que está siendo actualmente investigado por la Fiscalía General de la Nación¹³. De acuerdo con líderes de la subregión, este suceso, sumado a las dinámicas de control territorial por

⁹ Información obtenida del sitio web de la Fiscalía General de la Nación.

<https://www.fiscalia.gov.co/colombia/seccionales/incautan-mas-de-una-tonelada-de-cocaina-al-clan-del-golfo-en-uraba/>

¹⁰ Presidencia de la República. <https://idm.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Capturados-13-integrantes-del-Clan-del-Golfo-e-incautada-mas-de-media-200914.aspx>

¹¹ Fundación Ideas para la Paz. Base de datos de eventos de homicidio. Con Corte a julio 30 de 2020.

¹² Información recogida de prensa. Semana, 29 de febrero de 2020. Obtenido de:

<https://www.semana.com/nacion/articulo/preocupacion-por-asesinatos-de-lideres-sociales-en-antioquia-dos-mas/654389>

¹³ Información recogida de prensa. Semana, 29 de febrero de 2020. Obtenido de:

<https://www.semana.com/nacion/articulo/preocupacion-por-asesinatos-de-lideres-sociales-en-antioquia-dos-mas/654389>

parte de grupos armados, ha generado un escenario complejo para el ejercicio de nuevos liderazgos.

Líderes comunitarios de zonas rurales en la subregión coinciden en que, desde siempre, ha existido control territorial por parte de grupos armados ilegales. Actualmente, el Clan del Golfo es el grupo que ejerce mayor presión sobre la población, obligando al campesinado a 'cuidar ganado' en sus tierras, y a sembrar cultivos de uso ilícito¹⁴, lo que está generando desplazamientos forzados individuales y colectivos, de manera gradual y casi imperceptible; al respecto, la FIP solo reporta dos eventos de desplazamiento ocurridos en la subregión desde 2016. Sin embargo, según el informe 'Violencia Camuflada: la base social en riesgo', elaborado por el CINEP, dicha situación estaría propiciando el despojo de terrenos estratégicos para el desarrollo de grandes proyectos económicos¹⁵.

Otra tendencia que se evidencia tiene que ver la justicia de facto ejercida por el Clan del Golfo. Al respecto, las comunidades denuncian que comandantes del grupo han ganado protagonismo en la resolución de conflictos en las zonas rurales de los municipios: citan a reuniones con las personas involucradas en algún disenso o a toda la comunidad, que debe asistir a dichas reuniones sin excusas¹⁶. Además, en las comunidades indígenas han ordenado la entrega de los censos de las poblaciones, como mecanismo de control en sus territorios.

La situación de las víctimas

En el registro oficial de la Unidad para las Víctimas – UARIV, se tiene reporte de 330.945 víctimas en Urabá¹⁷, el cual representa el 68,5% de la población (483.077 habitantes según proyección del DANE); de estas víctimas, 304.490 son sujetos de atención. Los hechos victimizantes más recurrentes son el desplazamiento forzado (430.412 víctimas), homicidio (46.824 personas, entre víctimas directas e indirectas), y amenaza (16.133 víctimas), seguidos por la desaparición forzada, que registra 11.511 víctimas directas e indirectas.

Frente a los procesos de atención a víctimas, a 31 de julio del 2020, se recibieron 102.163 solicitudes, de las cuales el 41% corresponde a ayudas humanitarias, 22% a solicitudes de registro, el 0,44% a solicitudes de oferta y el 36% restante representa otras solicitudes. Al respecto, miembros de comunidades indígenas manifiestan falta de acompañamiento en la elaboración del plan de vida; colectivos de mujeres expresan su descontento por ausencia de atención diferencial, con enfoque de género, en los puntos de atención a víctimas, y por la disminución en la entrega de ayuda humanitaria.

Por su parte, en relación con la reparación integral, hasta la actual vigencia, se invirtieron \$412.670 millones de pesos en la indemnización de 51.902 personas y se

¹⁴ Alerta Temprana N° 048-18 Defensoría del Pueblo.

¹⁵ CINEP (2019) VIOLENCIA CAMUFLADA La base social en riesgo pág. 11. [ver aquí](#) informe completo

¹⁶ Alerta Temprana N° 048-18.

¹⁷ Información obtenida del sitio web de la UARIV. Ficha estadística Urabá Antioqueño.

realizaron talleres de acompañamiento a la indemnización en los que participaron 5.355 víctimas. Además, se brindó atención psicosocial a al menos 2.900 personas¹⁸; también se llevaron a cabo 2 acciones simbólicas, 5 actos de reconocimiento y 21 conmemoraciones.

Sobre la restitución de tierras, se presentan dificultades en procesos de restitución de derechos territoriales por intereses económicos de particulares en Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente, (zona limítrofe entre Turbo y Riosucio), a lo que se suman detenciones arbitrarias de reclamantes de tierras a finales del 2019¹⁹ y la falta de seguridad y garantías para acceder a los predios restituidos ubicados en el norte de Turbo.

Por otro lado, se diseñaron 16 Planes de retorno y reubicación, de los cuales hay 15 aprobados y 1 formulado. En lo que refiere a esquemas especiales de acompañamiento y retorno, el programa de Familias en su Tierra - FEST, se encuentra operando actualmente en los municipios de Apartadó, Carepa, Mutatá y Dabeiba beneficiando a 2.673 familias. Algunos participantes coinciden en manifestar inconformidad por la manera como se ha llevado a cabo el esquema de acompañamiento; declaran que las ferias de servicios se realizan con proveedores que no cumplen con la promesa de compra y los planes de inversión elaborados por las familias desde el componente de seguridad alimentaria ha sido modificado en repetidas ocasiones sin el consentimiento de los beneficiarios, generando retrasos y alteraciones el momento de entregar los insumos para este componente. Adicionalmente, hay 157 sujetos de reparación colectiva identificados, de los cuales 63 tienen el Plan Integral de Reparación Colectiva en fase de implementación, y 18 ya se han implementado.

Respecto a las acciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición - SIVJRN, se destaca la apertura del Macrocaso 004 de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP “Situación Territorial del Urabá Antioqueño”, y la exhumación del cementerio de Dabeiba, realizada por la JEP en la que se hallaron 54 cuerpos, que habían sido presuntamente presentados ilegítimamente como bajas en combate, por parte de agentes del Estado.

Principales dinámicas y trayectorias de la confrontación armada

En la subregión de Urabá, ejerce influencia el Clan del Golfo, a través de un amplio control territorial en todos los municipios. Este grupo armado ha fortalecido su accionar por medio de dos componentes:

El primero, organizado y civil, que opera principalmente en zonas urbanas y lugares estratégicos rurales, sobre el cual es difícil el accionar efectivo de la Fuerza Pública y, por otro lado, un componente armado que opera en las zonas rurales más alejadas y en el que hay también una amplia presencia de población joven. El

¹⁸ Con fecha de corte al 2019.

¹⁹ <https://www.justiciaypazcolombia.com/reclamantes-de-guacamayas-detenidos-un-falso-positivo-judicial/>

control territorial ejercido en el área rural ha llevado a que las comunidades abandonen sus tierras, debido a las amenazas, intimidaciones, confinamiento, venta forzosa y desplazamiento gota a gota. Esto se observa en comunidades campesinas de la zona rural de municipios como Apartadó, Turbo, Chigorodó y San Pedro de Urabá.

A esto se suma la supuesta connivencia entre la Fuerza Pública y los grupos armados²⁰. Esto ha generado desconfianza y malestar en los habitantes del área rural, y falta de legitimidad de las Fuerzas Armadas y Policiales que hacen presencia en la subregión²¹.

Capacidades territoriales para enfrentar el COVID-19

Tras consultar la Base de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social, a 12 de septiembre de 2020, había 6.746 casos de COVID-19 en la subregión, y se reportan 246 fallecidos por el virus en esos municipios.

Frente a las capacidades de la región, en términos de infraestructura médica se resalta que, al principio de la pandemia Urabá contaba con 15 camas UCI²² distribuidas en los diferentes centros médicos públicos y privados; además, las pruebas para determinar el contagio debían ser enviadas a la ciudad de Medellín para el procesamiento; hoy en día, Urabá cuenta con aproximadamente 65 camas UCI, tras las donaciones y ampliaciones de la capacidad médica, en municipios como Turbo. Además, tras la gestión de actores miembros del CUEES en cabeza de la Secretaría técnica²³ ejercida por el área de Innovación de la Universidad de Antioquia, en conjunto con el Instituto Colombiano de Medicina Tropical, La Diócesis de Apartadó y administraciones municipales –por resaltar algunos– permitieron la instalación, dotación y puesta en marcha de un laboratorio²⁴ para el procesamiento de muestras de SARS-CoV-2 en la región de Urabá, con una capacidad inicial de 44 muestras por día.

Es de resaltar que los principales receptores de pacientes que provienen de la región son Apartadó y Turbo, siendo el primero un municipio de categoría 3 con disponibilidad de infraestructura hospitalaria, y el segundo un distrito portuario con gran extensión territorial, pero pocas capacidades en términos de infraestructura de salud.

Sin embargo, continúa siendo un reto para las administraciones municipales el pleno cumplimiento de las reglamentaciones y la apropiación de las prácticas de cuidado

²⁰ Operaciones armadas de las AGC con apoyo de las Fuerzas Militares entre 2016 y 2018 para impedir la avanzada del ELN, fuente <https://www.justiciapazcolombia.com/agc-promueve-movilizacion-social/>

²¹ CINEP (2018). Violencia camuflada. La base social en riesgo. Obtenido de: <https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/violencia-camuflada-la-base-social-en-riesgo/>

²² <https://asmedasantioquia.org/wp-content/uploads/2020/04/panorama1-pandemia.jpg>

²³ Ver aquí información sobre Secretaría Técnica del CUEES Urabá

²⁴ <https://www.ces.edu.co/noticias/icmt-puso-en-marcha-laboratorio-para-diagnostico-de-covid-19-en-uraba/>



mutuo, se denota algunos habitantes por las calles, en fiestas y aglomeraciones sin protocolos de bioseguridad y autocuidado. Los entes territoriales han realizado la entrega de ayudas de alimentación y agua a la población.

Como consecuencia de la emergencia sanitaria, se tiene una percepción generalizada del aumento de la violencia de género e intrafamiliar, pues las actuales condiciones de aislamiento y teletrabajo han representado dificultades significativas en la respuesta institucional frente a esta demanda de acceso a las rutas de atención de violencia de género, informa la sociedad civil. Además, para los gobiernos locales las violencias basadas en género no han sido reconocidas como una problemática social, de salud pública, de Derechos Humanos y de Justicia.